



# Asamblea General

Distr. general  
2 de octubre de 2020  
Español  
Original: francés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones (24 a 28 de agosto de 2020)

#### Opinión núm. 55/2020, relativa a Ernest Nyabenda y Patrick Nsengiyumva (Burundi)\*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. El 10 de enero de 2020, de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno de Burundi una comunicación relativa a Ernest Nyabenda y Patrick Nsengiyumva. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

\* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. Ernest Nyabenda es ciudadano burundés nacido en 1982. Era miembro de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi en el momento de su detención y anteriormente fue guardaespaldas del ex Ministro de Defensa Nacional. Residía en el campamento militar situado en Musaga, Buyumbura.

5. Patrick Nsengiyumva es ciudadano burundés nacido en 1980. Era miembro de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi en el momento de su detención, asignado al campamento Ngaragara.

#### a) Detención y reclusión

6. La fuente informa de que, en la mañana del día 2 de agosto de 2015, un general, mano derecha del Presidente, fue asesinado por un grupo de individuos armados en las afueras de Kamenge. Inmediatamente se llevó a cabo una operación policial cerca del lugar del atentado para tratar de encontrar a los responsables de los hechos.

7. Según la fuente, en la tarde del 2 de agosto de 2015, mientras descansaba en su habitación, el Sr. Nsengiyumva fue convocado por sus superiores, quienes le pidieron que se dirigiera al servicio de inteligencia militar del Estado Mayor. Luego fue conducido en un vehículo del campamento y escoltado por guardaespaldas de la comandancia de la policía militar al calabozo de la policía militar, antes de ser llevado al cuartel general del Servicio Nacional de Inteligencia, ubicado cerca de la catedral de Regina Mundi en el municipio de Mukaza.

8. En cuanto al Sr. Nyabenda, la fuente describe que el 8 de agosto de 2015, mientras se dirigía a su lugar de residencia, fue detenido por unos diez agentes de policía, metido en una camioneta de la policía y conducido a la sede del Servicio Nacional de Inteligencia en Mukaza.

9. La fuente explica que, el 15 de agosto de 2015, un abogado de la fiscalía del distrito de Buyumbura interrogó por separado al Sr. Nsengiyumva y al Sr. Nyabenda sobre la base del atestado elaborado por el Servicio Nacional de Inteligencia. Durante ese interrogatorio, ninguno de ellos contó con la asistencia de un abogado. Luego fueron conducidos de nuevo a las celdas del Servicio Nacional de Inteligencia.

10. La fuente señala que, en el momento de la detención, no se presentó al Sr. Nsengiyumva ni al Sr. Nyabenda ningún mandamiento judicial. La fiscalía de Buyumbura no emitió una orden de detención contra ellos hasta el 4 de septiembre de 2015.

11. La fuente indica que, el 4 de septiembre de 2015, el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda fueron trasladados de los locales del Servicio Nacional de Inteligencia a la prisión de Gitega, donde permanecen reclusos.

12. Según la fuente, en noviembre de 2015, el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda comparecieron ante la sala del tribunal de distrito de Buyumbura para verificar la legalidad de su detención, que fue confirmada por el tribunal, junto con la de otros cuatro acusados.

13. La fuente informa de que seis meses más tarde, el 6 de mayo de 2016, el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda fueron llevados ante el juez de instrucción del tribunal de distrito de Buyumbura con las otras cuatro personas mencionadas. Sin embargo, la fuente afirma que no contaron con la asistencia de abogados y que la fiscalía no presentó ningún testigo. Tampoco figuraba ningún fundamento jurídico en sus citaciones.

14. La fuente añade que se celebraron nuevas audiencias el 1 de agosto y el 11 de octubre de 2016, en las que la fiscalía tampoco presentó testigos de cargo. Un mes más

tarde, se citó al Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda a comparecer ante el tribunal y se les informó de que este había reabierto las actuaciones para que la fiscalía pudiera realizar nuevas investigaciones. En la vista de 27 de diciembre de 2016, la fiscalía indicó que sus testigos no habían comparecido porque no disponían de protección, y el caso se aplazó *sine die*.

15. Así pues, la fuente afirma que ya han transcurrido más de cuatro años y aún no se ha convocado una vista pública, lo que impide que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda puedan presentar sus alegaciones.

b) Análisis jurídico

i. Categoría I

16. Según la fuente, la detención del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda tiene carácter arbitrario, en primer lugar por la falta de un fundamento jurídico que la justifique.

17. La fuente subraya que el artículo 9, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Burundi es parte, dispone que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.

18. En el presente caso, la fuente alega, en primer lugar, que no se inició ningún procedimiento en relación con la detención. No se presentó al Sr. Nsengiyumva ni al Sr. Nyabenda ninguna orden de detención ni ningún otro tipo de documento que justificara su detención en el momento en que esta se produjo, ni se les informó de sus derechos.

19. La fuente sostiene que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda no fueron informados en el momento de su detención del verdadero motivo de esta ni de sus derechos, en contra de lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. Además, no se informó a sus familias de su detención ni del lugar de reclusión, lo que infringe el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal. Por último, su prologada detención en la sede del Servicio Nacional de Inteligencia ha superado el plazo establecido en el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, que no ha sido prorrogado por el ministerio público.

20. En particular, la fuente explica que no fue hasta el 4 de septiembre de 2015, es decir, 26 días después de la detención del Sr. Nyabenda y 32 días después de la detención del Sr. Nsengiyumva, cuando estos se enteraron de que se había dictado una orden de detención contra ellos y que se les acusaba de actos constitutivos del delito de asesinato. La fuente llega a la conclusión de que desde la fecha de su detención, el 8 de agosto y el 2 de agosto de 2015 respectivamente, hasta el 4 de septiembre de 2015, la detención preventiva del Sr. Nyabenda y el Sr. Nsengiyumva carecía de fundamento jurídico.

21. Asimismo, la fuente alega que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda no tuvieron acceso a mecanismos de revisión judicial de su detención durante un período de tres meses. De hecho, la primera comparecencia ante el tribunal para el examen de la detención se celebró en noviembre de 2015, tres meses después de su detención, y el Estado no ha proporcionado ninguna base jurídica que justifique la detención preventiva.

22. Así pues, dado que la legalidad de su detención no se confirmó en el plazo prescrito por la ley, con arreglo al artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, que establece que “[l]a comparecencia ante el juez debe tener lugar a más tardar 15 días después de que se dicte la orden de detención”, la fuente concluye que la detención del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda carece de fundamento jurídico.

23. La fuente informa además de que el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal dispone que, “[h]abida cuenta de que la libertad es la norma y la detención la excepción, solo podrá ordenarse la detención preventiva del acusado si existen pruebas suficientes de su culpabilidad y los actos que se le imputan son susceptibles de constituir un delito punible por la ley con una pena de prisión de al menos un año”. Sin embargo, en el presente caso, la fuente sostiene que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda fueron detenidos sin el menor indicio de culpabilidad que pudiera justificar su participación en el asesinato del general. El Sr. Nyabenda se encontraba, como otros ciudadanos, muy cerca de la escena del asesinato.

Iba vestido de civil y no portaba armas. Según la fuente, simplemente se le detuvo porque se le identificó como miembro de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi procedente del antiguo ejército regular, antes de la integración de elementos del movimiento rebelde actualmente en el poder.

24. Según la fuente, la falta de pruebas de culpabilidad es la causa del lento procesamiento de estos casos.

25. En vista de lo anterior, la fuente afirma que la detención del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda es arbitraria conforme a la categoría I.

ii. Categoría III

26. La fuente alega que, de conformidad con los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo con arreglo al procedimiento establecido por la ley; y que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra actos que vulneren los derechos fundamentales que le han sido reconocidos, deberá ser presentada sin demora ante la autoridad judicial competente y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Por último, la prisión preventiva no debe ser la norma y sólo puede permitirse para garantizar la comparecencia del interesado en el juicio y la ejecución de la sentencia. La privación de libertad se considera arbitraria cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III).

27. La fuente aduce que los procedimientos a los que están sujetos el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda adolecen de numerosas irregularidades que constituyen una violación de la legislación de Burundi, así como de las normas internacionales relativas al derecho a la libertad y la seguridad personales y al derecho a un juicio imparcial. La acumulación de esas irregularidades implica que dichas personas no gozan de la protección de la ley, lo que confiere a dichas violaciones una gravedad tal que la detención debe considerarse arbitraria.

28. La fuente, como se ha explicado anteriormente, sostiene que la detención del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda no se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento, puesto que no se les presentó ningún documento que justificara su detención. Además, en el momento en que esta se produjo, el Sr. Nyabenda fue sometido a un trato inhumano: tras pedirle que se identificara y constatar que procedía del antiguo ejército regular, los policías lo aprehendieron bruscamente y lo acusaron de haber asesinado al general, lo golpearon y lo insultaron. Por su parte, el Sr. Nsengiyumva fue engañado por sus superiores, quienes lo mandaron llevar a la sede del Servicio Nacional de Inteligencia y le dijeron que volvería después.

29. Además, la fuente alega que la duración de la detención del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda en los locales del Servicio Nacional de Inteligencia ha superado con creces los plazos legales, que no han sido prorrogados por el ministerio público, en contravención del artículo 34 del Código de Procedimiento Penal. El Gobierno también habría incumplido su obligación de llevar a dichas personas ante un tribunal competente en el plazo prescrito, a saber, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la orden de detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal. En realidad, no se dictó orden judicial contra el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda hasta el 4 de septiembre de 2015, es decir, 32 y 26 días respectivamente después de su detención, y comparecieron ante el juez a fin de que esta fuera revisada en noviembre de 2015, o sea, tres meses después de que fueran detenidos y dos meses después de que se hubiera dictado la orden de detención.

30. La fuente recuerda también que, con arreglo al artículo 112 del Código de Procedimiento Penal, “[e]l juez decidirá de oficio poner fin a la detención preventiva si esta es irregular”. Sin embargo, los jueces competentes en cuanto al fondo y a la forma no sancionaron las irregularidades de la detención, como el vencimiento de los plazos prescritos, en contravención de lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal.

31. Además, la fuente alega que la orden de detención preventiva, que tenía una validez de 30 días en virtud del artículo 115 del Código de Procedimiento Penal, expiró antes del señalamiento de la vista del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda ante el tribunal. Por lo tanto, tras el vencimiento de esa orden, ningún documento justificaba su detención.

32. La fuente también indica que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda se vieron privados del derecho a recibir asistencia letrada durante las actuaciones judiciales. En efecto, la fuente afirma que, mientras tuvieron lugar los interrogatorios en los locales del Servicio Nacional de Inteligencia, durante los cuales se cometieron actos de tortura, el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda no contaron con la asistencia de abogados, a pesar de la obligación prevista en el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal. Se volvió a vulnerar dicho derecho durante el interrogatorio ante el juez de instrucción y durante la vista en la sala del tribunal.

33. La fuente indica además que, desde la detención de los Sres. Nsengiyumva y Nyabenda en agosto de 2015, no se ha avanzado en el caso. Sin embargo, el artículo 38 de la Constitución dispone que “[t]oda persona tiene derecho, en un procedimiento judicial o administrativo, a que su causa sea tratada con justicia y juzgada en un plazo razonable”. La fuente sostiene que esos dos casos llevan pendientes ante un tribunal de primera instancia desde hace cuatro años. La última audiencia pública se celebró el 27 de diciembre de 2016, momento en el que la fiscalía solicitó un aplazamiento para que comparecieran los testigos de cargo una vez que hubieran encontrado protección. El tribunal entonces aplazó ambas causas *sine die*.

34. Por esas razones, la fuente afirma que las irregularidades de procedimiento de las que han sido víctimas el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda constituyen una violación de su derecho a un juicio imparcial y son de una gravedad tal que su detención debe considerarse arbitraria conforme a la categoría III.

### iii. Categoría V

35. La fuente recuerda que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda fueron detenidos tras una operación policial en las proximidades del lugar donde fue agredido y asesinado un general, que era la mano derecha del Presidente y había sido jefe del Servicio Nacional de Inteligencia.

36. El Sr. Nyabenda, tras ser identificado como militar procedente del antiguo ejército regular, que se oponía a los movimientos rebeldes actualmente en el poder, y como antiguo guardaespaldas de un ex Ministro de Defensa Nacional, al que el régimen acusa de haber participado en el intento de golpe de estado de 13 de mayo de 2015, fue acusado falsamente de formar parte del grupo que atentó contra la vida del general.

37. La fuente recuerda también que, desde el decenio de 1960, Burundi ha experimentado crisis cíclicas que han tenido su origen en conflictos étnicos. La conclusión en 2000 del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi puso fin a diez años de guerra civil entre el ejército regular, de mayoría tutsi, y los movimientos rebeldes, principalmente hutus. A pesar de la firma de ese acuerdo y de la integración de los movimientos rebeldes en el ejército, existe, según la fuente, un espíritu de venganza en los dos grupos étnicos, uno de los cuales está en el poder. La fuente afirma que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda son miembros de la etnia tutsi y esa pertenencia étnica los somete, al parecer, a una extrema vulnerabilidad.

38. La fuente llega a la conclusión de que la detención del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda es arbitraria y se inscribe en las categorías I, III y V.

### *Respuesta del Gobierno*

39. El 10 de enero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió una comunicación al Gobierno en relación con el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda, en la que le pidió que proporcionara información detallada sobre dichas personas a más tardar el 10 de marzo de 2020. Más concretamente, le pedía que aclarase las disposiciones jurídicas que justificaban que siguieran estando privados de libertad, así como su compatibilidad con las obligaciones contraídas por Burundi en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y en

particular de los tratados ratificados por el Estado. Además, el Grupo de Trabajo exhortaba al Gobierno a que garantizara la integridad física y psíquica del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda.

40. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta alguna del Gobierno, que tampoco solicitó una prórroga del plazo para proporcionar la información solicitada, posibilidad prevista, sin embargo, en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. Este observa con preocupación que el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de responder a las alegaciones formuladas en el presente caso ni en otras comunicaciones presentadas en el marco del procedimiento ordinario a lo largo de los últimos años<sup>1</sup>. De hecho, el Gobierno no ha respondido al procedimiento de comunicación ordinario del Grupo de Trabajo desde 2012. El Grupo de Trabajo invita al Gobierno a que colabore de manera constructiva con él en todas las denuncias relativas a la privación arbitraria de la libertad.

### Deliberaciones

41. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

42. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

43. La fuente afirma que la detención y la reclusión del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda son arbitrarias y se inscriben en las categorías I, III y V. El Grupo de Trabajo examinará las alegaciones de la fuente por separado.

#### i. Categoría I

44. La fuente comunicó que el Sr. Nsengiyumva había sido detenido tras ser convocado por sus superiores el 2 de agosto de 2015, mientras descansaba en su habitación. Por su parte, el Sr. Nyabenda fue detenido el 8 de agosto de 2015 por una decena de policías cuando se dirigía a su residencia. Ambos fueron llevados al Servicio Nacional de Inteligencia. No se presentó al Sr. Nsengiyumva ni al Sr. Nyabenda ninguna orden de detención ni ningún otro tipo de documento que la justificara en el momento en que esta se produjo, sino solo el 4 de septiembre de 2015. El Sr. Nsengiyumva no fue informado de los motivos de la detención y al Sr. Nyabenda sólo se le dijo que estaba acusado de asesinar al general. El Gobierno ha optado por no refutar esas alegaciones.

45. Según el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Para que la privación de libertad tenga un fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención<sup>2</sup>. A falta de una justificación para esa detención, el Grupo de Trabajo determina que la detención sin orden judicial del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda constituye una vulneración del derecho que los asiste en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. El Grupo de Trabajo también observa con preocupación la falta de proporcionalidad en las circunstancias de la detención del Sr. Nyabenda, llevada a cabo por diez agentes que lo detuvieron violentamente y lo metieron en un vehículo.

46. Además, el Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 9, párrafo 2, del Pacto exige que los motivos de la detención se comuniquen al interesado en el momento en que esta se produce<sup>3</sup> y toma nota de la omisión de las autoridades en el caso del Sr. Nsengiyumva. El

<sup>1</sup> Véanse las opiniones núms. 14/2013, 33/2014, 30/2015, 8/2016, 54/2017, 7/2018, 37/2019, 25/2020 y 40/2020.

<sup>2</sup> Opiniones núms. 25/2020, párr. 34; 46/2018, párr. 48; 36/2018, párr. 40; 10/2018, párr. 45; y 38/2013, párr. 23.

<sup>3</sup> Opiniones núms. 46/2019, párr. 51; y 10/2015, párr. 34.

Grupo de Trabajo observa también que no se informó a las dos personas de los cargos que se les imputaban hasta el 4 de septiembre de 2015. En vista de esta demora, para la que el Gobierno no ha aportado ninguna justificación, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que se trata de una nueva violación del artículo 9, párrafo 2, del Pacto, ya que ni el Sr. Nsengiyumva ni el Sr. Nyabenda fueron informados rápidamente de los cargos que se les imputaban.

47. La fuente informó igualmente de que ni el Sr. Nsengiyumva ni el Sr. Nyabenda habían sido llevados con prontitud ante un juez, ya que comparecieron ante un abogado fiscal el 15 de agosto de 2015 y ante la sala del tribunal en noviembre de 2015. Esta alegación tampoco ha sido impugnada por el Gobierno.

48. Como ha subrayado anteriormente el Grupo de Trabajo, una fiscalía no puede considerarse una autoridad judicial a los efectos del artículo 9, párrafo 3, del Pacto<sup>4</sup>. El Grupo de Trabajo recuerda además que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. El Comité de Derechos Humanos precisa en el párrafo 33 de su observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, que, aunque el significado exacto de “sin demora” puede variar en función de las circunstancias objetivas, los plazos no deberán exceder de unos pocos días desde el momento de la detención. A juicio del Comité, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la vista judicial; todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias absolutamente excepcionales y estar justificado por ellas.

49. La fuente también afirma que el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal estipula que la comparecencia ante un juez debe tener lugar dentro de los 15 días siguientes a la emisión de la orden de detención. Si la detención tiene lugar el día de la emisión de la orden, esto es incompatible con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, ya que un plazo de 15 días es excesivo. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo invita al Gobierno a que ajuste esta disposición a las normas internacionales.

50. A ese respecto, el Grupo de Trabajo considera que las autoridades han incumplido la obligación que les incumbe en virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

51. Asimismo, el Grupo de Trabajo observa que las dos personas no fueron llevadas ante un juez antes de noviembre de 2015 y, por lo tanto, no tuvieron la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención antes de esa fecha, como exige el artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

52. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y la reclusión del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda carecen de todo fundamento jurídico, en contravención de lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9, párrafos 1 a 4, del Pacto, y son arbitrarias con arreglo a la categoría I.

## ii. Categoría III

53. La fuente explica que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda se vieron privados del derecho a recibir asistencia letrada durante las actuaciones judiciales. Afirma que, cuando fueron interrogados en las dependencias del Servicio Nacional de Inteligencia, no contaron con la asistencia de un abogado, ni tampoco durante el interrogatorio ante el juez de instrucción ni durante la vista ante la sala del tribunal. Dado que el Gobierno no ha aducido ningún argumento en contra, el Grupo de Trabajo considera que han quedado acreditados los hechos presentados por la fuente.

54. El Grupo de Trabajo recuerda que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a ser asistidas por un abogado de su elección en cualquier momento durante su

<sup>4</sup> Opiniones núms. 5/2020, párr. 72; 45/2019, párr. 52; y 14/2015, párr. 28. Véase también la observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 32.

privación de libertad, en particular inmediatamente después de su detención, y que ese acceso se debe facilitar sin demora<sup>5</sup>.

55. Habida cuenta de los hechos, el Grupo de Trabajo concluye que se ha vulnerado el derecho del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, previsto en el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto, así como su derecho a presentar una defensa efectiva mediante la asistencia letrada de su elección, previsto en el artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto.

56. Además, la fuente explica que el proceso seguido contra el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda ha sido indebida y excesivamente lento y que su caso sigue pendiente, ya que la última audiencia pública tuvo lugar el 27 de diciembre de 2016. En esa audiencia, el ministerio público había solicitado un aplazamiento de la causa a fin de que comparecieran los testigos de cargo una vez que hubieran encontrado la protección adecuada. En respuesta, el tribunal ordenó un aplazamiento *sine die*. El Gobierno no ha explicado las razones de esa demora.

57. El Grupo de Trabajo recuerda que el carácter razonable de la dilación en juzgar un asunto debe evaluarse en función de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta la complejidad de este, la conducta del acusado y la manera en que las autoridades hayan abordado el asunto<sup>6</sup>. En el presente caso, el Grupo de Trabajo considera, dado que la última vista tuvo lugar en diciembre de 2016 y que el caso se ha aplazado *sine die*, que se vulneró el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, establecido en el artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto.

58. Por estas razones, el Grupo de Trabajo concluye que las vulneraciones del derecho a un juicio imparcial, establecido en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto, son de una gravedad tal que confieren a la privación de libertad del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

### iii. Categoría V

59. La fuente afirma que el Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda fueron detenidos y recluidos debido a su identidad étnica. Indica que ambos hombres eran miembros del antiguo ejército regular, que se oponía a los movimientos rebeldes actualmente en el poder. Indica además que se identificó al Sr. Nyabenda, en particular, como antiguo guardaespaldas de un ex Ministro de Defensa Nacional acusado por el régimen de haber desempeñado un papel en el intento de golpe de estado de 13 de mayo de 2015. Por lo tanto, sobre esta base se acusó al Sr. Nsengiyumva y al Sr. Nyabenda de formar parte del grupo que atentó contra la vida del general.

60. El Grupo de Trabajo recuerda que, cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos, la detención es arbitraria.

61. El Grupo de Trabajo, recordando sus opiniones núms. 7/2018 y 25/2020, en las que llegó a la conclusión de que existía discriminación contra los miembros del antiguo ejército regular, de etnia tutsi<sup>7</sup>, y al no haber ninguna refutación por parte del Gobierno, considera

<sup>5</sup> Observación general núm. 32 (2007), del Comité de Derechos Humanos, relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párrs. 32 y 34; y Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 9 y directriz 8.

<sup>6</sup> Opiniones núms. 83/2019, párr. 70; y 45/2016, párr. 51. Véase también la observación general núm. 32 del Comité de Derechos Humanos, párr. 35.

<sup>7</sup> Véanse también las observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Burundi (CAT/C/BDI/CO/2/Add.1), párrs. 12, 13, 18 y 19.



que las alegaciones de la fuente son creíbles. Por lo tanto, concluye que la detención y la reclusión del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda son el resultado de una discriminación étnica y política, ya que fueron detenidos y reclusos únicamente porque eran miembros del ejército y uno trabajaba para un ex Ministro de Defensa Nacional. Ello constituye una violación de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la detención y la reclusión del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda son arbitrarias y se inscriben en la categoría V.

62. Además, y habida cuenta de esta última conclusión, el Grupo de Trabajo remite el caso al Relator Especial sobre cuestiones de las minorías.

### **Decisión**

63. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Patrick Nsengiyumva y de Ernest Nyabenda es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

64. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Burundi que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

65. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte medidas urgentes para garantizar la puesta en libertad inmediata del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda.

66. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

67. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que armonice su legislación con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y con los compromisos contraídos por Burundi en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

68. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre cuestiones de las minorías para que tome las medidas correspondientes.

69. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

70. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda y, de ser así, en qué fecha;

b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda;

c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Nsengiyumva y el Sr. Nyabenda, y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Burundi con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

71. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

72. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

73. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>8</sup>.

*[Aprobada el 28 de agosto de 2020]*

---

<sup>8</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.